

Mayo – agosto 2002

## Los movimientos sociales en América Latina Entre las convergencias sociales y el neoliberalismo armado<sup>1</sup>



Por José Seoane y Clara Algranati

### ■ La configuración de la protesta social

**E**n el largo ciclo de revitalización de la protesta que se abre a mediados de la década de los noventa en Latinoamérica, el último año y medio –aquel que va de mayo de 2001 hasta la actualidad– señala una intensificación del conflicto social en la región. Dicho proceso se grafica con claridad en los datos arrojados por el relevamiento elaborado por el *OSAL* mostrando un crecimiento a partir de dicha fecha que casi duplica las diferentes acciones protagonizadas por los movimientos sociales en el período anterior, ubicándose en más de 2.000 hechos el promedio cuatrimestral a partir del segundo cuatrimestre de 2001. En este nuevo ciclo, el segundo cuatrimestre de 2002 muestra una pequeña caída respecto del primero del año que alcanza casi a un 8%. Lejos de ser homogénea dicha disminución resulta particularmente de la reducción de los conflictos en Argentina y Bolivia. En el primer caso la agudización de la protesta que se abre en dicho país a partir de las movilizaciones de diciembre de 2001 y que se proyecta a lo largo de los primeros meses de 2002, cae casi un 50% para el segundo cuatrimestre del año aproximándose a los valores registrados para los últimos meses de 2001. En Bolivia para el mismo período también se verifica una disminución de los hechos de protesta (casi un 40%) en parte, quizás, por el desa-

rollo de la campaña electoral que recorre casi todo el período y que, en este caso, implicó el involucramiento directo del movimiento campesino-indígena –tanto de las federaciones del Chapare como de la región del Altiplano– alrededor de candidaturas surgidas del propio movimiento (ver artículo de Manuel De La Fuente en el presente número del *OSAL*). Por el contrario en otros países se aprecia un incremento de la conflictividad, especialmente en la región centroamericana –particularmente en Honduras y Nicaragua– y en Uruguay, manteniéndose estable en el resto del continente.

Por otra parte, en relación al cuatrimestre anterior puede señalarse una disminución de los conflictos impulsados por los asalariados del sector público (casi un 25% menos que el período precedente), aunque dentro de este conjunto se incrementan aquellas acciones promovidas por maestros y profesores universitarios. Los paros, movilizaciones y cortes de ruta llevados adelante por los maestros en toda Honduras por el cumplimiento del Estatuto Docente; las huelgas y movilizaciones también de maestros en distintas provincias de Argentina –que junto a los trabajadores estatales enfrentan el ajuste de las administraciones locales–; las protestas de docentes de la CNTE en México así como las prolongadas huelgas de profesores universitarios en diferentes estados de Brasil, ambas por incremento salarial, muestran los casos más significativos.

En contraposición a la evolución de las acciones de los asalariados del sector público, crecen las protestas desarrolladas por los trabajadores del sector privado (un 30% más que los meses previos), aunque las mismas siguen siendo proporcionalmente menores –aproximadamente un 37%– dentro del conjunto de las impulsadas por los asalariados. Este incremento de las luchas de estos trabajadores se expresa particularmente en el área de servicios. Entre las más significativas pueden mencionarse las movilizaciones y huelgas de los chóferes de ómnibus en Brasil contra los despidos y el recorte salarial; similares protestas en Argentina así como las acciones impulsadas por los trabajadores bancarios frente al cierre de entidades y despidos; también en Uruguay las protestas de bancarios y las movilizaciones contra las privatizaciones; en Perú el prolongado conflicto en Telefónica contra los despidos o el de los trabajadores de la construcción civil por reincorporaciones; así como las protestas en Venezuela en demanda de aumento salarial.

En otro sentido si bien las acciones impulsadas por el movimiento campesino son, en términos cuantitativos, un tanto superiores a las del primer cuatrimestre del año (con un crecimiento del 8%), las mismas presentan una configuración más fragmentada y localizada que períodos anteriores siendo notable, en la misma dirección, que las principales organizaciones campesinas protagonistas de significativas movilizaciones en el pasado –como por ejemplo el MST en Brasil, el zapatismo en México, la CONAIE en Ecuador y el movimiento campesino del Chapare boliviano– no tengan en este período similar actuación, quizás a excepción del movimiento campesino paraguayo que habrá de impulsar las masivas manifestaciones contra las privatizaciones en Asunción.

Simultáneamente con la protesta campesina se desarrollan también las acciones de los pequeños y medianos productores agropecuarios especialmente dirigidas contra la apertura comercial –en varios casos con pronunciamientos críticos al proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas– y en reclamo de subsidios estatales y políticas proteccionistas.

Finalmente, entre los sectores sociales que se destacan en la protesta debemos señalar el crecimiento de las acciones encabezadas por los estudiantes secundarios y universitarios (resultan un 48% mayor que las del primer cuatrimestre del año). Vale subrayar al respecto las sucesivas manifestaciones en reclamo de aumento del presupuesto e incremento del Fondo Solidario Estudiantil acontecidas en Chile, el ciclo de protestas que desemboca en una nueva huelga universitaria en Montevideo, Uruguay, contra la reducción presupuestaria prevista en el presupuesto fiscal para el año próximo y, aunque más fragmentadas, las acciones impulsadas por estudiantes universitarios en México y en Argentina.

### ■ **Ofensiva privatista y multisectoriales**

En los últimos números de esta publicación hemos venido reseñando algunas de las características que adopta la protesta y movilización de los sectores populares en Latinoamérica en confrontación con las políticas neoliberales. Entre éstas destacábamos en el anterior número la generalización de formas de lucha de confrontación en desmedro de las medidas demostrativas, el alcance de la difusión regional de ciertas modalidades de protesta y de organización (por ej.: los cortes de ruta y luego los cacerolazos), así como la afirmación de un proceso, ciertamente no lineal ni homogéneo, de creciente articulación multisectorial y politización de las luchas (Taddei, 2002).

Al calor de la agudización de la crisis económica, del quiebre de la legitimidad del régimen neoliberal y de la experiencia y desarrollo recientes de los movimientos sociales estos procesos de convergencias sociales a nivel nacional o regional, alcancen mayor o menor estabilidad o duración, son uno de los rasgos de este segundo cuatrimestre del año.

En este sentido vale recordar que las luchas sociales más significativas a lo largo de estos meses fueron las movilizaciones victoriosas contra las privatizaciones en Perú y Paraguay. Movilizaciones que supusieron la afir-

mación o surgimiento de experiencias de coordinación multisectorial: el Frente Amplio Cívico de Arequipa en Perú y el Congreso Democrático del Pueblo en Paraguay. Dichos procesos son abordados con detenimiento en el dossier temático del presente número.

Destacándose por la masividad que asume la protesta y por la demostrada capacidad de detener las ofensivas privatizadoras encaradas por ambos gobiernos, estos casos representan un proceso más general que se desarrolla también en otros países de la región.

En el caso peruano la constitución y desarrollo de los Frentes Cívicos de carácter local y regional tiene una larga historia que se remonta a la década de los '70, aunque resulta particularmente intensa alrededor de la lucha contra la dictadura fujimorista y la caída de dicho régimen. Vale recordar por ejemplo el papel que dichos agrupamientos cumplieron en la "Marcha de los Cuatro Suyos" que se constituyó en una de las movilizaciones más importantes contra el gobierno de Fujimori<sup>2</sup>. En este sentido, la batalla de Arequipa –y la participación significativa que le cupo al Frente Amplio Cívico de dicha ciudad– fue acompañada por acciones impulsadas por dichos frentes locales a lo largo de todo el sur peruano así como en otras regiones del país (Puno, Tacna, Cuzco, Loreto, Piura por citar sólo algunas de las ciudades). La experiencia de los paros cívicos urbanos y la existencia de una Coordinadora Nacional de Frentes Regionales dan cuenta tanto de las modalidades de lucha características de este movimiento –que supone en sus momentos más intensos la virtual ocupación de las ciudades– como de la articulación nacional consolidada en el último tiempo. No pueden dejar de señalarse las semejanzas que aproximan el conflicto en Arequipa a la llamada "Guerra del Agua" en Cochabamba acontecida en abril de 2000 contra la privatización de la empresa de aguas local. Como en el caso peruano, la movilización urbana llegó a paralizar y ocupar la ciudad durante días y puso fin al proceso privatizador.

En este sentido, la experiencia cumplida por la "Coordinadora por el Agua y la Vida" de

Cochabamba dinamizó, en cierta medida, el surgimiento o afirmación de Comités Cívicos locales en otras ciudades de Bolivia (Seoane, 2001). Estas formas de convergencia urbana y territorial toman cuerpo en este período, por ejemplo, en las protestas del Comité Cívico de Oruro por la estatización de la mina Huanuni –reivindicación zonal que finalmente también se obtiene– y en las movilizaciones multisectoriales en la ciudad de El Alto.

En relación a todas estas experiencias el proceso en Paraguay presenta algunas diferencias. No sólo porque la coordinación es de carácter nacional –y no local– sino también porque la misma asume la forma de una multisectorial emergida del acuerdo de múltiples organizaciones sociales y políticas. En este sentido el llamado Congreso Democrático del Pueblo resulta de la convergencia de dos plataformas anteriores (el Frente en Defensa de los Bienes Públicos y la Plenaria Popular Contra el Terrorismo de Estado) surgidas en dicho país en los últimos meses. Dicha convergencia supuso la confluencia de las más importantes organizaciones sociales del Paraguay<sup>3</sup> así como, y fundamentalmente, de la articulación de las dos más significativas organizaciones campesinas<sup>4</sup> (ver artículo de Dania Pilz, Quintín Riquelme y Verónica Villalba en la sección Análisis de casos).

En cierta medida el proceso en Paraguay puede asimilarse al acontecido en Uruguay, donde también, aunque no por iguales razones, la política privatizadora que recorrió la región en los '90 no hubo de hacer pie. Las semejanzas entre ambas experiencias pueden quizás ampliarse a las formas que asume la convergencia multisectorial contra las privatizaciones, siendo que en Uruguay la coordinación nacional –impulsada fundamentalmente por el PIT-CNT– agrupa a distintas organizaciones sociales, en este caso en articulación con el FA-EP (Frente Amplio-Encuentro Progresista). En este país la protesta contra la nueva ofensiva privatizadora encarada por el presidente Battle también recorre todo el cuatrimestre aunque parezca ocupar un segundo lugar ante la profundización de la crisis económica, y obtiene una victoria parcial con la derogación parlamentaria de la legislación que amparaba la privatización de las

compañías ANTEL y ANCEL, teléfonos y celulares, respectivamente (ver artículo de Daniel Olesker en esta revista).

Para el período pueden citarse otras experiencias de lucha contra las privatizaciones y de afirmación de coordinaciones multisectoriales. Vale destacar las reiteradas protestas en Nicaragua contra la privatización del agua (que abarca las empresas HIDROGESA y ENACA así como el uso del lago Apanás) protagonizadas por la Red Nacional de Consumidores y otras organizaciones, alrededor de las cuales surgen coordinaciones multisectoriales locales, y que –en un contexto donde la empresa ENRON, perdidosa en la licitación, impugna también el proceso– concluye en la aprobación parlamentaria de la revisión del mismo. En ese sentido en México el envío al parlamento del proyecto presidencial de reforma constitucional para habilitar la privatización del sector eléctrico a mediados de agosto es confrontado por la movilización de fin de mes convocada por el Frente Nacional de Resistencia contra la Privatización de la Industria Eléctrica impulsado por el Sindicato Mexicano de Electricidad. En la misma dirección puede señalarse la experiencia de la lucha de los ejidatarios de San Salvador Atenco contra la expropiación de sus tierras destinadas a la construcción de un nuevo aeropuerto para la capital del país. La persistencia de la lucha, la experiencia de constitución de municipios autónomos, la conformación del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra –multisectorial de solidaridad y apoyo– conseguirá sobre el fin del período el anuncio público del abandono del proyecto.

Quizás como en ningún otro período anterior, las luchas contra las privatizaciones hubieron de obtener resultados favorables a los movimientos populares, aunque en muchos casos ciertamente con carácter transitorio. Resulta significativo que estas experiencias coincidan con la disminución de los conflictos de los asalariados del sector público y con la afirmación de estrategias de convergencia social particularmente intensas en el ámbito local.

Pero dichas convergencias no sólo surgen frente a las ofensivas privatizadoras. Podría-

mos mencionar también, para el caso de la Argentina, las movilizaciones del 27/6 y el 3/7 frente a la brutal represión al movimiento piquetero –que potenciaron o impulsaron la conformación de distintas multisectoriales–, la realización del Foro Social Mundial Temático –que contó con la adhesión de más de 700 organizaciones sociales locales y con más de 15 mil participantes– y luego la campaña “Que se vayan todos” que hace su primera movilización hacia fines de agosto y que supuso también la posibilidad de constituir un marco de convergencia, aunque de corta duración.

### ■ Neoliberalismo armado y resistencia

En respuesta a la doble crisis (económica y de legitimidad) que cuestiona crecientemente al régimen neoliberal, hemos ya señalado la afirmación de una nueva fase de “neoliberalismo armado” –en este número Pablo González Casanova lo califica como “neoliberalismo de guerra”. En el mismo sentido que lo señala González Casanova, el neoliberalismo armado no refiere sólo a una política de guerra y de intervención militar esgrimida como prerrogativa internacional por el Presidente Bush, sino también a la profundización de un diagrama social represivo que tiende a militarizar las relaciones sociales al interior de los países y que abarca tanto las reformas legales que cercenan derechos y libertades democráticas, la criminalización y judicialización de la protesta, la consolidación de gobiernos cada vez más autoritarios y el crecimiento de la represión estatal y paraestatal. Justificada bajo el pretendido combate al narcotráfico, el terrorismo o la delincuencia, la ideología de la “seguridad” pretende la reconstrucción de la llamada “governabilidad neoliberal”.

El crecimiento regional de la represión estatal y paraestatal –ver entre otros ejemplos los hechos que motivaron en Paraguay la creación de la Plenaria Popular contra el Terrorismo de Estado o el acoso que sufren los municipios autónomos zapatistas en el cuatrimestre– es, trágicamente, uno de los signos del período. Pero la conformación de este

diagrama represivo adopta una intensidad significativa, en los meses bajo análisis, en Guatemala y Colombia.

En Guatemala se consolida e intensifica la presión de los ex PAC (Patrulla de Autodefensa Civil)<sup>5</sup>, para lograr una compensación económica en calidad de afectados por el conflicto armado de los años '80 y '90. Los mismos realizan numerosas y masivas protestas en diferentes zonas del país, concentraciones, toma de rehenes, y amenazan con ocupar edificios públicos si sus demandas no les son satisfechas. El presidente Portillo asiste a su reunión en ocasión del II aniversario de la Asociación de ex PAC y promete responder a sus pedidos. Esta legitimación estatal de una de las fuerzas que encabezó la contrainsurgencia en las décadas pasadas coincide con la intensificación de los apremios ilegales a sedes de organizaciones de lucha por los derechos humanos y las amenazas a dirigentes sociales y políticos. Ambos hechos dan cuenta de los intentos de afirmación de un régimen de nuevo autoritarismo bajo el liderazgo del tristemente conocido General Efraín Ríos Montt (Figuerola Ibarra, 2002).

En el caso de Colombia el triunfo en las elecciones presidenciales de Álvaro Uribe ha abierto un proceso que no sólo persigue profundizar el enfrentamiento militar con la guerrilla –luego de la ruptura de los acuerdos de paz del período anterior– sino también de militarización social en la tentativa de afirmar una legitimidad autoritaria, particularmente en los sectores urbanos de clases medias. En el corto lapso de gestión del nuevo gobierno distintas iniciativas van en esta dirección: la asignación de funciones judiciales a la fuerza pública (Decreto 2002), la creación de una red de informantes que aspira a reclutar a un millón de personas, la vinculación de taxistas y transportistas al control de la seguridad en calles y carreteras, el establecimiento del “día de la recompensa” para aquellos que denuncien actividades consideradas terroristas, el incremento del presupuesto y reorganización de las Fuerzas Armadas aumentando los efectivos, y la creación de una milicia campesina que busca sumar 20 mil hombres. Simultáneamente –y no dando lugar a dudas sobre la

orientación económico-social de su política– el gobierno de Uribe impulsa una reforma laboral neoliberal y decidió a partir de un decreto presidencial el desmantelamiento de derechos de los cuales gozaban los trabajadores del sector público. Estas acciones son acompañadas por el incremento del apoyo norteamericano al Plan Colombia, el plan de fumigaciones masivas y la ayuda a las Fuerzas Armadas<sup>6</sup>. En el mismo sentido se prolongan, durante estos meses, los intentos por desestabilizar al gobierno venezolano.

Profundizando una tendencia abierta a partir del 11 de setiembre de 2001, de la mano de la política norteamericana para la región, se generaliza la temática del terrorismo y la seguridad como parte central de la agenda de los encuentros gubernamentales. Vale destacar que la Cumbre de Presidentes Americanos realizada en Lima, Perú, culmina señalando al libre comercio, la seguridad y la infraestructura para el transporte como los desafíos futuros, en consonancia con los intereses norteamericanos.

En relación con las políticas de liberalización y acuerdos comerciales, a diferencia de la intensidad que había alcanzado la firma de estos tratados bilaterales en el cuatrimestre anterior, para el presente período sólo se registran avances más modestos (entre otras cuestiones el gobierno norteamericano obtiene finalmente la ratificación del *Fast Track*; en la Cumbre de Presidentes de Centroamérica y México, en Mérida, se acuerda reimpulsar el Plan Puebla Panamá y convertirlo en soporte del ALCA; en Buenos Aires los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay y México ratifican su apoyo al ALCA y, para el mismo período, entra en vigencia el TLC firmado entre El Salvador y Chile). Por el contrario la agudización de la recesión económica así como la expansión regional del colapso financiero y bancario –que afecta particularmente en estos meses a Argentina, Brasil y Uruguay– ponen en el centro de la escena el agotamiento y crisis del modelo neoliberal. En tanto la aún precaria continuidad de dicho modelo está atada a la ansiada recuperación del crédito internacional –sea para refinanciar la deuda ya contraída o para aminorar el ca-

rácter recesivo del actual proceso— la negociación de nuevos paquetes de ayuda por el FMI, especialmente en América del Sur, y la simultánea imposición de recetas privatizadoras y de ajuste del gasto fiscal fueron algunos de los aspectos centrales de la política norteamericana para esta región en el período.

De allí también la significación de las luchas contra las privatizaciones que analizamos anteriormente. El rechazo a estos condicionamientos así como a las políticas continentales de subordinación y ajuste ocuparon un lugar importante en las protestas de estos meses y, particularmente, en las experiencias de coordinación regional entre los distintos movimientos sociales.

En este sentido la realización del III Foro Mesoamericano a mediados de julio en Managua, Nicaragua, con la participación de más de 350 organizaciones, además de manifestarse contra el Plan Puebla Panamá, el ALCA, el FMI y la deuda externa supuso un paso importante en la coordinación de la campaña y movilización regional. En la misma dirección puede señalarse la edición del Foro Social Mundial Temático en Argentina bajo la convocatoria “La crisis del neoliberalismo en Argentina y los desafíos para el movimiento global”, siendo el primer foro temático impulsado por el Foro Social Mundial. Por otra parte, la continuidad en la preparación de la campaña regional contra el ALCA —así como el fortalecimiento de las coordinaciones locales alrededor de dicha iniciativa— habrá de fructificar en la primera consulta nacional realizada por los movimientos sociales brasileños y que contó con más de 10 millones de votantes en octubre pasado. Estos tres ejemplos señalan tanto la vitalidad que asumen las convergencias regionales e internacionales contra la mundialización neoliberal como su importancia ante la profundidad de la crisis regional y las oportunidades que esta plantea, especialmente cuando estas confluencias se forjan alrededor de campañas comunes en torno a ejes de lucha concretos capaces de convocar e involucrar a los distintos movimientos sociales en conflicto.

## Bibliografía

Figueroa Ibarra, Carlos 2002 *Militarización, crimen y poder invisible en Guatemala: el retorno del centauro*, mimeo.

Seoane, José 2001 “La protesta social en América Latina”, en *OSAL* (Buenos Aires) N° 3, Enero.

Taddei, Emilio 2002 “Crisis económica, protesta social y ‘neoliberalismo armado’ en América Latina, en *OSAL* (Buenos Aires), N° 7, Junio.

Zuluaga Nieto, Jaime 2002 *Colombia: entre la democracia y el autoritarismo*, mimeo.

## Notas

1 Agradecemos especialmente a Atilio Boron, Emilio Taddei e Ivana Brighenti por su colaboración en la elaboración de este artículo.

2 Entrevista a Javier Azpur (Propuesta Ciudadana-Perú), realizada por Mariana Fassí en el marco del seminario internacional “Conflicto social, militarización y democracia en América Latina. Nuevos problemas y desafíos para los estudios sobre conflicto y paz en la región”, organizado por CLACSO, Buenos Aires, 16 al 18 de septiembre de 2002.

3 Ver sección Documentos del Conflicto en este número del *OSAL*.

4 La Federación Nacional Campesina (FNC) y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), divididas a partir de 1997.

5 Presentación de Carlos Figueroa Ibarra (Universidad de Puebla-México) en el seminario “Conflicto social, militarización y democracia en América Latina. Nuevos problemas y desafíos para los estudios sobre conflicto y paz en la región” organizado por CLACSO, Buenos Aires, 16 al 18 de septiembre de 2002.

6 Presentación de Jaime Zuluaga Nieto (IEPRI-Colombia) en el seminario “Conflicto social, militarización y democracia en América Latina. Nuevos problemas y desafíos para los estudios sobre conflicto y paz en la región” organizado por CLACSO, Buenos Aires, 16 al 18 de septiembre de 2002.